

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO¹

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MEXICO

María Eugenia Guadarrama-Olivera²

Fecha de recepción: 20 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2018

Resumen - Este artículo trata sobre la violencia contra las mujeres que se ejerce en las instituciones de educación superior, como resultado de las representaciones sociales de género tradicionales. Se da un panorama sobre la violencia contra las mujeres que existe en México, así como de los avances legales en la materia. Además, se proponen algunos mecanismos necesarios para atender y solucionar la violencia contra las mujeres dentro de las instituciones de educación superior.

Abstract - This paper examines the subject of violence against women that occurs in higher education institutions as a result of traditional gender social representations. An overview on violence against women in Mexico is given, as well as on the legal advances on this subject. Moreover, some mechanisms necessary to attend and solve violence against women within higher education institutions are also proposed.



Palabras clave: Violencia contra la mujer, avances legales, instituciones de educación superior, mecanismos de atención.



Keywords: Violence against women, legal advances, higher education institutions, attention mechanisms.

¹ Artículo aceptado mediante arbitraje de pares.

² Doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona. Fundadora y Coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (CEGUV), desde 2013 a la fecha. Investigadora de Tiempo Completo. Integrante de la maestría en Estudios de Género del CEGUV (PNPC) y del Sistema Nacional de Investigadores. Correo electrónico: mguadarrama@uv.mx

Introducción

La lucha feminista ha sostenido, desde hace mucho tiempo, numerosos esfuerzos por cambiar la situación y la condición desigual de las mujeres, pero fue en la década de los años 70 del siglo XX cuando se inició una reflexión mucho más clara sobre las formas de desigualdad y discriminación contra las mujeres y la falta de cumplimiento de sus derechos humanos. Ferrer y Bosch (2007) apuntan que las feministas de la centuria anterior se centraron en nuevos temas y problemas, entre ellos el de la violencia contra las mujeres, la violencia sexual y la doméstica.

Así, uno de los primeros temas abordados tanto en el movimiento feminista como en los estudios de la mujer y de género fue el de la violencia contra las mujeres. Años después, el hecho sigue vigente; ellas viven aún diversos tipos de violencias, sustentadas en la discriminación que les impide el ejercicio pleno de sus derechos y que se traducen en agresión por el solo hecho de ser mujeres. Dos de las maneras más comunes de esa violencia son el acoso y el hostigamiento sexual, a las que los ámbitos universitarios no son ajenos.

Se ha andado mucho en el camino de los consensos para poder eliminar todas las violencias contra las mujeres. Durante décadas, el feminismo ha logrado impulsar en lo jurídico cambios para alcanzar los principios de dignidad, libertad, no discriminación e igualdad para las mujeres a través de convenciones, conferencias y tratados internacionales, generales y específicos; ha incidido de manera decisiva en el avance jurídico de los derechos humanos de las mujeres, de leyes, reglamentos, protocolos y estatutos nacionales —de observancia para todo tipo de organismos e instituciones— que establecen la no discriminación y la no violencia contra las mujeres, y que se han traducido en leyes y reformas normativas, así como en políticas internacionales y nacionales a favor de la igualdad de derechos y oportunidades para ellas.

El movimiento feminista mexicano y sus representantes ante los órganos internacionales,

nacionales y locales han dado una férrea y prolongada lucha, y participado en múltiples debates; así ha sido posible tener presencia ante los diferentes niveles de gobierno, y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido, México ha signado numerosos acuerdos internacionales que han favorecido en nuestro país la promulgación de nuevas leyes y reformas que se suman a las ya existentes para fortalecer la no discriminación, la igualdad entre el varón y la mujer, el reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños, y los derechos humanos en general, y que establecen que las y los ciudadanos mexicanos deberán contar con las garantías para su protección y con los mecanismos para acceder a esos derechos.

En este sentido, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017) estipula la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y de acuerdo con la reforma realizada en 2011, el artículo 1º constitucional asegura que:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Lo anterior implica la obligatoriedad para todas las instituciones de la sociedad mexicana, incluidas las universidades, de armonizar sus legislaciones tanto a los tratados internacionales que México ha firmado, como a las leyes nacionales que salvaguardan los derechos de las personas para ejercer su ciudadanía.

También ha habido avances en el país, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene como objeto:

Establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los

municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CONAVIM, 2017, p. 1).

Esta misma ley, en su artículo 5, fracción IV, define la violencia contra las mujeres como “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público” (CONAVIM, 2017, p. 2). Pero hay que aceptar que no han sido suficientes para lograr las condiciones necesarias que favorezcan su aplicación y funcionamiento, como tampoco para cambiar los factores sociales estructurales, para erradicar actitudes violentas hacia las mujeres, ni para transformar las percepciones sociales sobre las causas y el ejercicio de la violencia. Aunque hay avances sustantivos considerables en la esfera jurídica y en el desarrollo de las acciones de sensibilización, formación e información para enfrentar y atender la violencia, en la vida cotidiana es una constante tanto en el mundo privado como en el público, así como en todas las instituciones sociales, incluida la escuela.

Los documentos internacionales y las leyes nacionales han señalado, pues, la necesidad de que las mujeres obtengan todos los derechos y todas las libertades, lo que implicaría contar con las condiciones económicas, sociales y culturales que sustenten y garanticen esos derechos para que ellas vivan sin sombra de violencia. Esto, como es patente en muchos ámbitos y esferas de lo social, no se ha conseguido, por lo que se puede afirmar que actualmente se han tenido progresos en el plano jurídico, pero que aún no se reflejan en el plano real de la cotidianidad. En México no se ha podido establecer la obligatoriedad de estas leyes al interior de

las instituciones sociales —privadas y públicas—, como las universidades, para crear condiciones y mecanismos que enfrenten la violencia contra las mujeres.

En este sentido, hay que enfatizar que las instituciones de educación superior (IES) tienen la obligación de reconocer los tratados internacionales y la legislación mexicana, y de revisar, o modificar, cuáles son los mecanismos y herramientas que tienen para —desde su competencia— prevenir, atender, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en los términos que establecen los tratados internacionales y las leyes nacionales, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque al día de hoy no se haya podido establecer la obligatoriedad de dichas normas al interior de las IES para crear las condiciones y herramientas que erradiquen la violencia.

Violencia contra las mujeres

El concepto de violencia contra las mujeres ha sido paulatinamente reemplazado en muchos discursos por el de violencia de género; esta sustitución ha ido paralela a la del concepto de estudios de la mujer por el de estudios de género. Todo ello se ha justificado con la idea de utilizar una noción que abarque todas las violencias que tengan como base la discriminación y desigualdad contra cualquier género, y que los estudios impliquen a todos los géneros. Así se ha difuminado, de alguna manera, el concepto de violencia contra las mujeres y se ha perdido el foco de esta problemática; por lo tanto, si bien toda violencia de género es de suyo grave, en este trabajo nos centramos en la violencia contra las mujeres.

Hablar de este tema es abordar un fenómeno complejo y difícil de definir de manera absoluta. Los momentos históricos, los contextos socioculturales, económicos y políticos le dan tintes diversos. Pero, en cualquier caso, las mujeres viven un tipo de violencia que se hace patente en los obstáculos que encuentran en cualquier momento de sus vidas, en todos los ámbitos, cuando quieren hacer valer sus derechos y se topan con la violencia que hombres e instituciones ejercen contra ellas para mantener el orden social patriarcal

basado en la desigualdad y en la discriminación, resultado de las relaciones de poder; violencia cotidiana, constante, privada y pública, que sucede en todos los sectores —incluido el universitario—, de diferentes modalidades y en grados diversos que llegan hasta la muerte.

Es importante destacar que la Convención de Belem do Pará estableció, hace ya casi 25 años, de manera precisa en su artículo 1, que “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, y señala claramente en su segundo artículo que esta violencia puede ocurrir en el ámbito público, que comprende “el lugar de trabajo, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar” (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994, p. 3).

Para el análisis de la violencia contra las mujeres se suelen distinguir los ámbitos en que ésta se ejerce, que son principalmente el familiar, el laboral, el comunitario y el escolar; así como también las modalidades de esa violencia: física, emocional, económica o patrimonial, sexual u obstétrica, entre las más usuales.

Irene Casique (2010, p. 40) habla de cuatro formas fundamentales de violencia contra las mujeres por parte de sus parejas:

La violencia emocional (que se refiere a todo tipo de violencia verbal o conductual —acción u omisión— ejercida con el fin de intimidar, controlar o desvalorizar a la mujer), la violencia física (toda acción que cause daño a la integridad física de la mujer), la violencia sexual (todo acto u omisión que amenaza o daña la integridad y la libertad sexual de la mujer) y la violencia económica (toda acción orientada a controlar el acceso a ingresos o recursos económicos de la mujer).

Casique menciona que cuando se interrelacionan estas violencias, y la forma en que lo hacen, pueden poner a las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad; esto se entiende claramente en aquellas con menores recursos de todo tipo, pero también sucede en el caso de las que tienen mayor control o cantidad de recursos que los hombres, situación que puede interpretarse como un desafío a la autoridad y al poder de sus parejas hombres, y que puede provocar violencia, física o sexual casi siempre, por parte de ellos para restablecer su posición dominante. Esta violencia se profundiza en el momento en que las mujeres, en su lucha por la ciudadanía, contravienen el orden social patriarcal que establece una división entre los espacios privado y público, en el cual el primero se asigna como el propio para las mujeres, y el segundo el adecuado para los hombres. Ello comprende la prohibición implícita de castigarlas por ocupar, o querer ocupar, un sitio en la esfera pública y la justificación de los hombres para ejercer violencia contra ellas, como sucede en los casos de acoso y hostigamiento sexual. Como señala Martha Torres Falcón (2004, p. 308):

La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus expresiones —hostigamiento, abuso sexual, violación, maltrato en el interior del hogar—, se sustenta en relaciones de desigualdad y asimetrías de poder presentes en todos los niveles de la organización social, incluida por supuesto la familia.

Este tipo de violencia se ejerce con invisibilidad, debido a la naturalización por su frecuencia e inevitabilidad; es considerada como un fenómeno “privado”, por lo que se le percibe como una situación que no corresponde solucionar a las autoridades de cualquier tipo y es resultado de la permisividad social que se otorga a los hombres para “castigar” a las mujeres que transgreden las fronteras culturales de género impuestas.

Por otro lado, no podemos hablar de violencia contra las mujeres sin considerar el contexto de enorme y pavorosa violencia cotidiana en el país, en el que se

repiten todas las formas y modalidades posibles en su práctica, incluyendo la muerte, y donde sólo cambian los rostros de quienes la ejercen. Ello propicia una mayor virulencia y creciente aumento de la violencia contra las mujeres, cuestión que no podemos dejar de considerar para entender el aumento de cifras de mujeres violentadas en el territorio mexicano.

Para dar una idea de esta problemática en nuestro país, basta observar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de (ENDIREH) 2016, que presenta los datos nacionales más recientes que permiten tener un panorama, si no el más exacto, sí el más amplio, al respecto. Esta Encuesta tuvo como objetivo:

Generar información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo de violencia: emocional-psicológica, física, sexual, económica o patrimonial; en la relación de pareja y en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar; para estimar la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres; con la finalidad de apoyar en el diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género (INEGI, 2017a, p. 4).

La ENDIREH 2016 (INEGI, 2017a, p. 1) también expone que “del total de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, 30.7 millones de ellas, o sea el 66.1%, han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja”. Y detalla que 49.0% ha padecido violencia emocional, 41.3% violencia sexual, 34.0% violencia física y 29.0% violencia económica, patrimonial o discriminación en el trabajo.

Respecto de la violencia en el ámbito laboral, la encuesta revela que en los últimos 12 meses, 22.5% de las mujeres la sufrió, que ocurrió principalmente en las instalaciones de trabajo en 79.1%; que los atacantes

fueron principalmente sus compañeros/as de trabajo en 35.2%; que en promedio, cada mujer tuvo tres agresores en el último año, y que de las agresiones ejercidas contra ellas en este ámbito, 47.9% fueron de tipo sexual.

En cuanto al ámbito comunitario, la ENDIREH 2016 señala que durante los últimos 12 meses 38.7% de mujeres la padeció; que las agresiones ocurrieron en parques y en menor medida en autobús, microbús y metro, pero principalmente en la calle, en 65.3%, y que estos ataques en la calle fueron sobre todo de tipo sexual, en 68.8%; que consistieron especialmente en piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación. También menciona sobre la violencia ejercida en el ámbito familiar en el último año, que 10.3% de las mujeres fue víctima de algún acto violento por parte de un integrante de su familia, sin considerar el esposo o la pareja; que esta violencia sucedió principalmente en la casa de las mujeres y en la de otro familiar; que quienes más las agredieron fueron los hermanos/as, en 25.4%; que de las agresiones sufridas en casa de la mujer, la sexual ocurrió en 6.0%; y que los principales agresores sexuales fueron los tíos y los primos.

Acerca del entorno escolar, la encuesta indica que en los últimos 12 meses 25.3% de las mujeres que han asistido a la escuela la vivieron; que esta violencia se ha llevado a cabo sobre todo en el centro de estudios en 74.3%; que del tipo de agresiones ocurridas en dicho espacio, 38.3% fue sexual; y que los principales agresores fueron los compañeros de las estudiantes. Los datos también indican que son las mujeres jóvenes entre 20 y 39 años las que se encuentran más expuestas a la violencia, que en el ámbito escolar 25.3% de las mujeres la han padecido, y que de estas agresiones 38.3% fue de tipo sexual.

Logros y retos sobre violencia contra las mujeres en las IES

La década de los años 90 del siglo pasado se caracteriza por la institucionalización del discurso feminista en la academia, con lo que se abrió paso a legitimar los temas

de la mujer y de género, y las demandas del movimiento feminista; los derechos de las mujeres entraron en las agendas de las instituciones políticas y sociales. Las IES no fueron ajenas a esta institucionalización y con ello se inició el establecimiento y consolidación de estudios, y los primeros intentos por introducir políticas y acciones de equidad e igualdad de género en esas entidades. A finales de esa década, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados etiquetó recursos para incorporar la perspectiva de género, bajo los lineamientos que ésta decide, en los organismos de la administración federal, incluidas las IES.

Hoy en día, en el panorama nacional podemos observar cambios normativos y jurídicos importantes, como ya se dijo; organismos e instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han plasmado en el papel formas y estrategias que impulsan la institucionalización de la perspectiva de género, así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

Ello ha incentivado la integración de redes nacionales y regionales de estudios de género y el establecimiento formal de unidades, centros y programas de género; así como el reconocimiento académico del tema de género dentro de sus planes y programas de estudio y de investigación. También ha propiciado que se tomen medidas para atender problemáticas específicas de violencia de género y de hostigamiento y acoso sexual; en este sentido, si bien algunas IES ya han instaurado protocolos formales, muchas sólo han conseguido la aplicación de ciertos reglamentos generales o guías que no tienen el mismo peso de acción legal.

Actualmente, en la segunda década del siglo XXI, se puede afirmar que grupos de académicas feministas y con perspectiva de género en las IES han trabajado al interior de sus comunidades y con sus autoridades para diseñar protocolos orientados a prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso

y el hostigamiento sexual. Sin embargo, es todavía una tarea incipiente y llena de obstáculos para lograrlo por causas multifactoriales, entre las que destacan las siguientes:

- La lenta asimilación de las políticas dirigidas hacia el respeto de los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género. La implementación de estas políticas y la apertura académica hacia la violencia contra la mujer no ha conseguido la armonización de las legislaciones universitarias con los Tratados y Convenciones internacionales, ni con las leyes nacionales referidas a esta problemática, así como tampoco que las IES otorguen el personal, los recursos financieros y de infraestructura necesarios para su cabal desarrollo.
- El sexismo imperante en las prácticas cotidianas en todas las funciones de la universidad.
- La escasa información y la formación de las y los integrantes de las comunidades universitarias sobre la violencia contra la mujer, y el acoso y el hostigamiento sexual, a pesar de los constantes casos que se viven en esas instituciones escolares, incluidas las estudiantes que son, por sus condiciones, quienes más vulnerables se encuentran.
- La falta de cultura de denuncia por parte de quienes son o han sido víctimas de estas situaciones; las mujeres no sólo no las denuncian, sino que tampoco saben a dónde ni con quién acudir. Así lo indican los resultados presentados por Ana Buquet, Jennifer Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno, en el libro *Intrusas en la universidad* (2013), quienes señalan que la mayoría de los universitarios que padecen violencia de género son mujeres y que son unas cuantas las que denuncian, pero que tampoco se conoce con exactitud el número de quejas presentadas ni tampoco la solución que se les ha dado.
- Silvia Frías (2014), cuando habla de la violencia sexual hacia las mujeres en el ámbito público,

sostiene que aquellas que fueron víctimas no acudieron a denunciar o no pidieron ayuda ni asesoría, porque minimizaban los abusos al considerar que se trataba de algo sin importancia, por la falta de información, por la desconfianza en las autoridades, porque no querían que sus familias se enteraran o bien porque éstas las convencieron de no hacerlo, o por vergüenza.

- Las situaciones de acoso y hostigamiento sexual se han naturalizado de tal manera que las universitarias no las identifican como agresiones, y algunas inclusive lo ven como un halago, como resultado de las representaciones culturales de género. Las autoridades, el profesorado o funcionarios de entidades y dependencias universitarias no saben, por desconocimiento o desinterés, cómo proceder antes estos casos, o bien consideran que son problemas de índole personal o circunstancias propias del mundo privado de las universitarias.
- A lo anterior se suma el hecho de que las mujeres que sí denuncian se enfrentan a una actitud de incredulidad, ignorancia o reconocimiento por parte de casi la totalidad de directivos/as, funcionarios/as y órganos colegiados de las IES, que optan más por el desinterés, por la minimización de los hechos, por la falta de atención a las quejas, por la calificación de los hechos como parte de la vida personal de las mujeres, o por la complicidad con los pares académicos o administrativos que han sido señalados. Estas respuestas que las autoridades universitarias dan a las mujeres que pretenden denunciar tienen la finalidad de disuadirlas, porque "no van a lograr nada", ya que no tienen pruebas suficientes para efectuar algún procedimiento; o bien, "resuelven" la situación a través de reubicar, jubilar o expulsar temporalmente al integrante del personal académico, administrativo, de intendencia o vigilancia denunciado. Son contados los casos

en que la denuncia procede, ya que son pocas las IES que están realmente preparadas para entender y atender estos hechos; se cuentan con los dedos de las manos las instituciones universitarias que han creado dependencias especializadas, con personal calificado, con reglamentación y protocolos adecuados para su actuación, y que han logrado comunidades sensibilizadas e informadas.

Estas mismas razones, junto a la falta de instancias universitarias especializadas y de protocolos institucionales para prevenir, atender, erradicar y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en las IES, así como la falta de armonización de las legislaciones universitarias con las leyes nacionales y las convenciones y tratados internacionales ratificados por México, son las causas que influyen en la ausencia de denuncias por parte de las estudiantes, maestras, administrativas o funcionarias. Por ello, hay que enfatizar que:

- Es imprescindible la creación de políticas, acciones y espacios idóneos para operar, con el propósito de atender y resolver la violencia contra las mujeres, específicamente el acoso y hostigamiento sexual, al interior de las IES. Es preciso que se impulsen acciones de sensibilización sobre estos asuntos entre sus integrantes.
- Es ineludible la integración de estas temáticas en la docencia, en la investigación y en la difusión universitaria. Es obligada la real incorporación de la perspectiva de género en las IES que impida prácticas patriarcales y androcéntricas.
- Es indispensable que se establezcan protocolos de acción que reflejen la necesidad de un cambio en los principios y valores tradicionales implementados en la institución, que se aseguren todas las condiciones para ponerlos en práctica; pero además, que se den a conocer a las

comunidades que integran las IES los resultados logrados con la entrada en vigor de dichos protocolos.

No obstante, es preciso considerar que el establecimiento de protocolos institucionales no puede ser la única medida contra la violencia hacia las mujeres; debe de ir acompañada de medidas de sensibilización, formación e información hacia toda la comunidad de las IES. Y que no basta un curso o una campaña de sensibilización para crear cambios, sino que resulta fundamental un proceso de formación e información de mayor calado para generar un aprendizaje que permita reconocer el origen de nuestras representaciones sociales sobre la violencia contra las mujeres, y sobre el acoso y el hostigamiento sexual, que conduzca a definir los mecanismos para transformarlas.

Además, es de suma importancia la participación de las propias mujeres universitarias en la elaboración de medidas para enfrentar esta violencia que existe en las IES, así como en el diseño de políticas, reglamentos y acciones institucionales, pues tradicionalmente han sido consideradas más como casos ocurridos o parte de las estadísticas, y no como participantes activas y propositivas en la construcción de soluciones.

En este sentido, hay que considerar la intervención cada día más organizada de las estudiantes, en ocasiones apoyadas por sus compañeros, para denunciar el acoso de otros alumnos, pero sobre todo el hostigamiento de profesores que forman parte de sus programas de estudio. Estas denuncias son frecuentemente frenadas por los órganos colegiados de las entidades correspondientes que hacen caso omiso de ellas y asumen actitudes de complicidad con sus colegas implicados. Esto deriva en la impunidad de los maestros y facilita la frecuencia y gravedad de sus agresiones sexuales hacia las estudiantes, e inclusive con sus colegas, colaboradoras y trabajadoras administrativas.

Por otro lado, es innegable la necesidad de desarrollar investigaciones sobre esta problemática al interior de las IES, cuyos resultados permitan construir indicadores

y conocer las representaciones sociales que las y los integrantes de las comunidades específicas tienen sobre el tema, que sirvan de fundamento para elaborar y poner en marcha políticas y acciones institucionales con miras a prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, particularmente el acoso y el hostigamiento sexual, y permitir la reparación del daño a quienes son víctimas; además de proponer acciones que permitan construir planes educativos y programas de sensibilización y capacitación para todos y todas las integrantes de las instituciones de educación superior.

Conclusiones

Al analizar el fenómeno de la violencia contra las mujeres es fundamental reconocer los aportes del feminismo desde lo político en la lucha para eliminarla, al exponer sus condiciones de desigualdad y discriminación en todos los ámbitos, causa fundamental del acoso y del hostigamiento sexual; pero también hay que admitir que estos aportes no han impedido una constante y creciente violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado.

Se puede decir, entonces, que se tienen avances de derechos, pero no de hechos. Las políticas por la igualdad de género, por el respeto a los derechos humanos de las mujeres y por una vida libre de violencia para las mujeres han llegado a las IES, aunque las rutas de acción para incorporarlas a sus propias legislaciones, aplicarlas e integrarlas en su vida cotidiana se encuentran en proceso. Como ya se señaló, en algunas IES hay ya estatutos, reglamentos, protocolos o procedimientos, pero no todos armonizados con lo mandado por los acuerdos internacionales y las leyes nacionales, ni con la formalización y el peso institucional asegurados; además, todavía existen resistencias de las y los integrantes de las comunidades universitarias, sobre todo en los casos de hostigamiento y acoso sexual.

Sin embargo, aunque la creación y aplicación de políticas de igualdad de género, de no discriminación y de no violencia contra las mujeres en las IES han trazado

un camino lento, no tiene ruta de regreso. Hoy, a casi cuatro décadas de los primeros intentos por incidir en el espacio formal de las instituciones de educación superior, es palpable que a nivel discursivo las autoridades universitarias se pronuncian por la necesidad de cambios para alcanzar la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos de las mujeres y de personas diverso-genéricas, de no discriminación y de no violencia contra las mujeres, empero, aún no construyen las condiciones reales para asegurar esta metamorfosis ni para resolver las causas que la propician.

Para lo anterior es forzoso que exista en las IES una voluntad política y un convencimiento de las autoridades que posibiliten diseñar, implementar y evaluar políticas reales de equidad e igualdad y de no discriminación entre los géneros; que se pueda contar con personal formado, capacitado y especializado en género, y concretamente en violencia contra las mujeres; que se establezca una estructura orgánica con facultades normativas y de supervisión para la cabal inclusión de las políticas de género que prevengan la violencia contra las mujeres; que se cuente con presupuesto suficiente para realizar y sostener acciones en dicho sentido; que se lleven a cabo tareas de diagnóstico, planeación, seguimiento, evaluación y diseño de indicadores en la materia para evaluar y dar seguimiento a las medidas implementadas, y poder conocer los resultados de las políticas, proyectos e iniciativas puestas en marcha en las IES; que se definan instancias y mecanismos que garanticen la atención y sanción de las conductas de acoso y hostigamiento sexual, e impidan la impunidad, además de garantizar la atención oportuna y eficaz de las víctimas; que se promueva la investigación sobre esta problemática para obtener indicadores confiables; que se incluya la lucha contra el sexismo y la violencia en el currículo escolar; que se mantenga un programa de educación continua dirigido a toda la comunidad universitaria con el fin de promover la prevención del acoso y hostigamiento sexual y otras formas de violencia; que se sostenga una instancia universitaria que proporcione asistencia legal y

psicológica a víctimas de violencia contra las mujeres y de acoso y hostigamiento sexual; y que quienes asuman posiciones de incidencia, transformación y control de la cultura académica donde se construyan nuevas relaciones de género, lo hagan con una mirada feminista.

Así también, es indispensable la alianza entre instituciones de educación superior para compartir experiencias, avances, obstáculos y reformulaciones de los mecanismos elaborados en cada una, a pesar de sus diferentes características y condiciones, a fin de avanzar de manera más ágil y segura.

En resumen, para facilitar el camino contra la violencia hacia las mujeres hay que consolidar lo ya obtenido e implementar cambios en las IES que permitan una transformación de paradigmas sobre la violencia contra las universitarias. La aplicación de políticas institucionales como herramientas eficaces para erradicarla no tiene vuelta de hoja; la tarea no es fácil, pero tampoco imposible.

Referencias

- Barquet, M. (2013). Feminismo y academia. En Espinosa G. y Lau, A. (coords.), *Un fantasma recorre el siglo. Luchas feministas en México 1910-2010* (pp. 481-518). México: UAM-Xochimilco/Editorial Ítaca/ECOSUR.
- Bedolla, P., Bustos, O., Flores, F. y García B. (1989). *Estudios de género y Feminismo 1*. México: Fontamara.
- Buquet, A., Cooper, J., Mingo, A. y Moreno, H. (2013). *Intrusas en la universidad*. México: UNAM-PUEG/IISUE. Disponible en <http://132.248.192.241/~editorial/wp-content/uploads/2015/04/Intrusas-en-la-universidad1.pdf>.
- Casique, I. (2010). Factores de empoderamiento y protección de las mujeres contra la violencia. *Revista Mexicana de Sociología*, 72(1), 37-71.
- Castro, R. y Riquer, F. (2012). Claroscuros en el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres. En Casique I. y Castro, R. (coords.), *Retratos de la violencia contra las mujeres en México. Análisis de Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica*

de las Relaciones en los Hogares (pp. 9-39), Cuaderno de Trabajo no. 35. México: Instituto Nacional de las Mujeres.

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). (2017). *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*. México: Diario Oficial de la Federación. Texto vigente de la última reforma publicada DOF 22-06-2017. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2017). Disponible en <http://wwwordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (1994). *Convención De Belém Do Pará*. Disponible en https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf

Ferrer, V. y Bosch, E. (2007). El papel del movimiento feminista en la consideración social de la violencia contra las mujeres: el caso de España. *Mujeres en Red. El Periódico Feminista*. Disponible en <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article881>

Frías, S. (2014). Acoso, hostigamiento y violencia sexual en el trabajo y en el ámbito público. En Casique, I. y Castro, R. (coords.), *Expresiones y contextos de la violencia contra las mujeres en México. Resultados de la ENDIREH 2011 en comparación con sus versiones previas 2003 y 2006* (pp. 313-365). México: Instituto Nacional de las Mujeres.

Hernández, C. A., Jiménez, M. y Galicia, S. (2015). La percepción de las mujeres hacia las acciones de prevención, denuncia y erradicación del hostigamiento sexual en una escuela del Instituto Politécnico Nacional en México. *Formación Universitaria*, 8(6), 65-74.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2016). *Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)*. México: autor. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

INEGI. (2017). *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Principales resultados*. México: autor. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

INEGI. (2017a). *Boletín de prensa n° 379/17*. México: autor. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

Instituto Nacional de las Mujeres (2016). *Boletín*, 2(7), Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BoletinN7_2016.pdf

Mingo, A. y Moreno, H. (2015). El ocioso intento de tapar el sol con un dedo: violencia de género en la universidad. *Perfiles educativos*, 37(148), 138-155.

Salinas Rodríguez, J. L. y Espinosa Sierra, V. (2013). Prevalencia y percepción del acoso sexual de profesores hacia estudiantes de la licenciatura de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores-Iztacala: un estudio exploratorio. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 16(1), 125-147.

Torres Falcón, M. (2004). Violencia contra las mujeres y derechos humanos. En Torres, M. (comp.), *Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales* (pp. 307-334). México: El Colegio de México/PIEM.

UNAM. (2016). *Protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM*. México: autor. Disponible en <http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-de-genero.pdf>

Vélez Bautista, G. (2013). Análisis, prevención y atención del hostigamiento y el acoso escolar y sexual hacia las y los estudiantes: caso de la Universidad Autónoma del Estado de México. *Casa de la Mujer*, 22(1-2), 27-41.